



BOLIVIA: EL RETORNO DE LA DICTADURA

Desde la convocatoria a elecciones por parte del gobierno del General Hugo Banzer en julio de 1978, hasta julio de este año, se han suscitado en Bolivia cuatro golpes de Estado y la conformación de dos gobiernos civiles transitorios.

El último golpe de Estado del 17 de julio, que instaura en el poder al general Luis García Meza y desplaza a la entonces Presidenta Lidia Gueiler, es la culminación de una serie de amenazas de la Fuerza Armada boliviana al proceso de retorno a la democracia que se inicia en agosto del año pasado.

Para comprender este nuevo atentado a la democracia, debemos considerar que se realiza luego del proceso electoral en el que virtualmente ganan las fuerzas de centro-izquierda, reunidas en la Unidad Democrática Popular, que llevan como candidato a Hernán Siles Huazo, y que además responden a un amplio desarrollo de la organización sindical y gremial en el país andino; a esto hay que añadir los intereses militaristas de poder y de los beneficios que de él se derivan.

El proceso de democratización en Bolivia había sufrido ya a fines de 1979 un retraso por el golpe de Estado del General Natush Busch —contra el entonces presidente Walter Guevara Arze—, quien debido a presiones de las organizaciones sindicales y partidos políticos tuvo que entregar el mando a Lidia Gueiler, quien elegida interinamente por el parlamento, convocaría a elecciones el 29 de junio de 1980 y entregaría el poder a quien resultara triunfador.

Pero tampoco el gobierno de la Presidenta Lidia Gueiler sería aceptado fácilmente por los

militares más reaccionarios, ya que éstos tratarán de desestabilizarlo mediante amenazas públicas de golpe de Estado y una clara insubordinación al gobierno constituido.

El General García Meza, ya a mediados de noviembre, había propiciado una insubordinación militar que obligó a la recién posesionada Presidenta interina Lidia Gueiler a destituir al máximo jefe del ejército, General René Villarroel, y a nombrar en su reemplazo al General Rubén Rocha Patiño.

El tono amenazante de García Meza en las intervenciones públicas había conducido a que se considerara el líder de los militares descontentos con el proceso de democratización, hasta culminar con su nombramiento como jefe del ejército en abril de 1980. Algunos meses antes de las elecciones presidenciales los militares habían amenazado con un golpe de Estado, lo que los llevó a un enfrentamiento particular con el Embajador de los Estados Unidos, Marvin Weisman, y pidieron su retiro del país por su carácter intervencionista en los asuntos internos de Bolivia.

Una vez desarrollado el proceso electoral, el 29 de junio, éste daba como virtual triunfador por mayoría relativa a Hernán Siles Huazo candidato de la UDP, seguido con un margen amplio por Víctor Paz Estenssoro del Movimiento Nacionalista Revolucionario Alianza, a Hugo Banzaer de la Acción Democrática Nacionalista y a Marcelo Quiroga Santacruz del Partido Socialista UNO; parecía inminente que el congreso elegiría al presidente entre los dos candidatos que obtuvieron mayores votos.

Unos días antes del golpe, el comandante de la Fuerza Aérea, General Waldo Bernal, Advirtió que "los gobiernos surgidos del congreso y los interinatos son incapaces de resolver los problemas económicos y sociales de Bolivia", y el 17 de julio había retornado la dictadura al país; tropas del ejército, la fuerza naval y la aviación ocuparon La Paz en una operación destinada a instalar en Bolivia "un gobierno nacionalista de las fuerzas armadas".

La represión comenzó con la captura de la Presidenta Lidia Gueiler y de sus ministros, con las tomas de las radiodifusoras, periódicos, la universidad, las oficinas de Associated Press de la Central Obrera Boliviana (COB), se catearon parroquias y casas religiosas, etc.

Se capturó periodistas, sacerdotes y religiosas, —varios están desaparecidos— al máximo dirigente de la COB, Juan Lechín O., se asesinó a Marcelo Quiroga Santacruz candidato del Partido Socialista UNO y a otros dirigentes sindicales.

La respuesta popular no se hizo esperar, a pesar de la militarización de las ciudades; la COB hizo un llamado a la huelga general, al bloqueo de caminos y a la entrada en acción del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (CONADE), formado el 11 de abril ante las amenazas

golpistas; el CONADE llamó al pueblo a desarrollar sus actividades de comunicación y difusión de la situación, de organizar y desplegar la resistencia del pueblo ante los ataques que atenten o pongan en peligro el proceso democrático.

Las radiodifusoras mineras, las únicas que no habían sido controladas en ese momento, llamaban a la resistencia, los mineros se preparaban para resistir la intervención del ejército en las minas.

La represión se acentuó en los días subsiguientes al golpe de Estado, hasta que el gobierno logro el control de las minas y sus radiodifusoras, todo esto mediante un proceso represivo orientado a destruir las organizaciones políticas, sindicales y cualquier tipo de oposición. Es significativo que el Arzobispo de La Paz, Monseñor Jorge Manrique, fue amenazado a muerte por haber denunciado la violación a los derechos humanos que realizaba el gobierno de facto.

A medida que los acontecimientos se desarrollaban, a nivel internacional el golpe de Estado era denunciado y repudiado por considerarse un atentado a la democracia, aun Estados Unidos amenazó con suprimir toda clase de ayuda militar y económica al nuevo gobierno y con retirar a su personal diplomático y militar. Los países andinos convocaron a una reunión de la



OEA para condenar el golpe militar y asumir otras medidas. Se denunció la colaboración del gobierno argentino —primero que reconoció al gobierno militar de Bolivia— en el golpe de Estado, al que envió ayuda militar y paramilitar.

Se denunció las vinculaciones del golpe de Estado en Bolivia con el tráfico de cocaína, mostrando el carácter corrupto del régimen que se había instalado.

Llegó a tal punto esta acusación que un congresista norteamericano denunció las vinculaciones entre los narcotraficantes que habían logrado puestos de importancia en el gobierno y que mantenían amplias relaciones con jefes militares. Esto llevó al gobierno de facto a capturar a periodistas y a deportarlos, demostrándose así el carácter corrupto de la dictadura.

Este nuevo hecho, que atenta contra las ansias democráticas del pueblo boliviano, demuestra una vez más que los militares están dispuestos a mantenerse en el poder a costa de una mayor represión y corrupción: formas tradicionales de los dictadores de mantenerse en el poder y obtener beneficios.

Es también una clara demostración de los intereses económicos y políticos de los gobiernos dictatoriales y represivos del cono suramericano, que no están dispuestos a permitir gobiernos de corte democrático que atenten a sus intereses geopolíticos en la región; esto lo evidencia la ayu-

da militar del gobierno de Videla al golpe de Estado. La instalación de un gobierno democrático en Bolivia habría representado un serio peligro a la estabilidad de los gobiernos de Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay, en los que en los últimos años se ha desarrollado una gran oposición a sus planes económicos liberales y a sus planes políticos de permanencia indefinida en el poder.

En cuanto a las perspectivas de un proceso democrático en Bolivia, éstas se encuentran subordinadas al islamamiento internacional que se pueda mantener al régimen militar, y al desarrollo de nuevas formas de lucha contra la dictadura que evidencien su carácter antipopular y represivo. Un aspecto que habría de tener en cuenta es que este nuevo régimen pretende permanecer en el poder por tiempo indefinido —como lo evidencian las declaraciones de García Meza cuando dice “me quedaré 20 años en el poder”— al igual que los demás regímenes del cono sur.

Es de esperarse que este nuevo atentado a la democracia demuestre una vez más que las vías tradicionales para la conformación de gobiernos democráticos en América Latina se van cerrando, y se busquen nuevas alternativas.

A.G.